

## MEMORIA EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2010, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, siendo de aplicación su artículo 12 por tratarse este proyecto de un texto de carácter normativo puramente organizativo. Este informe se estructura de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

### I. FICHA RESUMEN EJECUTIVO

<b>Consejería / Órgano directivo proponente</b>	Consejería de Economía, Hacienda y Empleo	<b>Fecha inicial</b>	diciembre de 2021
<b>Título de la norma</b>	Ley por la que se modifica la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público.		
<b>Tipo de Memoria</b>	<input type="checkbox"/> Extendida <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutiva		
<b>OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA</b>			
<b>Situación que se regula</b>	Establecer, con vocación de permanencia, la competencia del Tribunal Administración de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la instrucción de los procedimientos sancionadores del Título II de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y establecer la forma de designación del instructor en estos procedimientos. Asimismo, para garantizar el funcionamiento y la continuidad de la actividad del Tribunal, se establece la posibilidad de renovación de sus miembros por un único periodo de seis años.		
<b>Objetivos que se persiguen</b>	Eliminar la situación de transitoriedad y clarificar la competencia del Tribunal Administración de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores del Título II de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que hasta ahora estaban previstos en una disposición transitoria de una ley modificativa de Ley reguladora de este órgano.		



<b>Principales alternativas consideradas</b>	Se ha contemplado la posibilidad de no regular nada. Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde que se asignó transitoriamente esta competencia al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ha quedado demostrado que el Tribunal es el órgano adecuado para realizar este tipo de actuaciones.
<b>CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO</b>	
<b>Tipo de norma</b>	Ley de la Asamblea.
<b>Estructura de la Norma</b>	El anteproyecto de ley se estructura en un único artículo en el que se modifica la redacción de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público y una disposición derogatoria.
<b>Informes recabados</b>	<p>Informe de Calidad Normativa</p> <p>Informes de la Dirección General de Igualdad, sobre el impacto de género y por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.</p> <p>Informe de la Dirección General de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad.</p> <p>Informe del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Informe de observaciones de las secretarías generales técnicas</p>
<b>Trámite de Consulta Pública</b>	No se ha sometido a este trámite al tratarse de una norma de carácter organizativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general de la Comunidad de Madrid.
<b>Trámite de audiencia</b>	No se ha sometido a trámite de audiencia e información pública al tratarse de una norma de carácter organizativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general de la Comunidad de Madrid.
<b>ANÁLISIS DE IMPACTOS</b>	



<b>ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS</b>	<p>El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 26.1.1, reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid para establecer su organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno. La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público regula en su artículo 3, el régimen jurídico del Tribunal Administrativo de Contratación Pública.</p>	
<b>IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO</b>	<p>Efectos sobre la economía en general</p>	<p>Del contenido del proyecto no se deriva incidencia directa sobre la economía en general</p>
	<p>En relación con la competencia</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia.</p> <p><input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.</p>
	<p>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</p>	<p><input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas.</p> <p>Cuantificación estimada:</p> <p><input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas.</p> <p>Cuantificación estimada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.</p>
	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p>	<p><input type="checkbox"/> Implica un gasto</p> <p><input type="checkbox"/> Implica un ingreso.</p>



	<input checked="" type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.	
IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO	La norma tiene un impacto de género	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO		<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
IMPACTO EN MATERIA DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA		<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS	Impacto en la unidad de mercado	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
OTRAS CONSIDERACIONES	Ninguna	

## II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.

### 1. Fines y objetivos.

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, reguló en su artículo 3 el régimen jurídico del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

La Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reguló en el Título II, con carácter básico, el nuevo régimen de buen gobierno. Este régimen se aplica en las Comunidades Autónomas, a los altos cargos “o asimilados” que tengan dicha consideración conforme a la normativa autonómica.

Respecto a la competencia sancionadora, el artículo 31 (se establece su carácter básico) dispone:

*“Artículo 31. Órgano competente y procedimiento.*

*1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos.*



*La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable.*

*2. El órgano competente para ordenar la incoación será:*

*a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.*

*b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.*

*c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento.*

*3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente.*

*4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:*

*a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.*

*b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.*

*c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.*

*5. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador regulado en este título serán recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo."*

Para dar cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en la Comunidad de Madrid, la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo, encomienda a un órgano independiente, como es el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, la incoación e instrucción de expedientes sancionadores frente a infracciones en materia de buen gobierno que cometan los altos cargos



de la Comunidad de Madrid, así como la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información.

La disposición final primera de esta Ley establece que *“tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a la Asamblea un Proyecto de Ley de modificación del artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de creación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid a los efectos de adaptar su denominación y regulación a las nuevas competencias que le atribuye esta Ley”*.

En cumplimiento de dicho mandato, la Ley 5/2016, de 22 de julio, modificó la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, estableciendo en su disposición transitoria segunda, apartado 2 que *“2. En tanto se mantenga la vigencia de esta Disposición Transitoria corresponderá al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, la incoación, instrucción y propuesta de resolución del procedimiento administrativo sancionador previsto en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por las infracciones cometidas por los altos cargos de la Comunidad de Madrid a que se refiere el artículo 2 de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.*

*Será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y las normas procedimentales contenidas en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre.”*

La Ley 5/2016, modifica también el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, reguladora del TACP y en su nuevo apartado Seis, punto 3 establece que: *“3 Corresponde al Presidente la incoación del procedimiento sancionador a que se refiere la disposición transitoria segunda de esta ley en tanto mantenga su vigencia”*.

De acuerdo con lo anterior, en tanto otra ley no disponga otra cosa (o no se establezca otro régimen) el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid es competente para la “incoación, instrucción y propuesta de resolución” de los expedientes sancionadores en materia de buen gobierno. Dentro de esa competencia general, se atribuye la incoación al Presidente, pero no se determina a quién corresponde la instrucción y propuesta de resolución.

Se pretende ahora clarificar la competencia del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, designándolo con vocación de permanencia como el órgano competente para incoar e instruir este tipo de expedientes y a la vez especificar la forma de designación del instructor en los términos previstos en la normativa básica de aplicación.

Asimismo, para garantizar el funcionamiento y la continuidad de la actividad del Tribunal, se establece la posibilidad de renovación de sus miembros por un único periodo de seis años.



## **2. Adecuación a los principios de buena regulación.**

El proyecto se adecúa, tanto en su tramitación como en su contenido, a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la norma propuesta trata de clarificar la competencia del Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid, designándolo con vocación de permanencia como el órgano competente para incoar e instruir este tipo de expedientes y a la vez se especifica la forma de designación del instructor.

Por otro lado, se cumple el principio de proporcionalidad, ya que se contiene la regulación imprescindible y necesaria para atender la necesidad a cubrir pues se modifica la Ley que regula este órgano para regular con carácter permanente las competencias del Tribunal en la materia sin más innovación en el ordenamiento jurídico que la eliminación de la transitoriedad en la atribución de esta competencia.

Se ha cumplido, igualmente, con el principio de seguridad jurídica, con la plasmación de la actuación en una norma que será objeto de publicación. Así mismo se dicta en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable y claro que facilita su conocimiento y comprensión.

En cuanto al principio de transparencia, la norma tiene carácter organizativo, por lo que está exenta de los distintos trámites propios de la participación pública, esto es, consulta pública y tramites de audiencia e información públicas, si bien, en su elaboración se ha contado con la consulta de las secretarías generales técnicas. Tras la publicación de la norma, esta quedará a disposición para su consulta en la base de legislación de la Comunidad de Madrid contenida en su Portal de Transparencia.

Finalmente, se adecúa al principio de eficiencia, ya que esta norma no conlleva cargas administrativas para los ciudadanos. Así mismo la regulación propuesta es la mínima indispensable para atender a su objetivo.

## **III. TÍTULO COMPETENCIAL.**

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 26.1.1, reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid para establecer su organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público regula en su artículo 3, el régimen jurídico del Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

## **IV. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN.**

### **1. Contenido.**



El anteproyecto remitido se estructura en un único artículo, una disposición transitoria y una disposición derogatoria.

En el artículo único se modifica la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, clarificando la competencia del Tribunal Administración de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid en la instrucción de los procedimientos sancionadores del Título II de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y se establece cómo se designa al instructor en estos procedimientos. Asimismo, para garantizar el funcionamiento y la continuidad de la actividad del Tribunal, se establece la posibilidad de renovación de sus miembros por un único periodo de seis años.

En la disposición transitoria, se establece que la posibilidad de renovación se refiere a los miembros que desempeñen su cargo a la entrada en vigor de la ley.

La disposición derogatoria, deroga el apartado 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

## **2. Descripción de la tramitación.**

En la tramitación administrativa del anteproyecto de ley se han cumplido las disposiciones vigentes, especialmente las referentes a la elaboración de disposiciones de carácter organizativo, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, observándose los siguientes trámites:

- Informe de calidad normativa, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo y el Decreto 191/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
- Informe de impacto de género de la Dirección General de Igualdad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Informe de la Dirección General de Igualdad, de conformidad con lo establecido en el Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
- Informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia de la Dirección General de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y en relación con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996.
- Informe del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de 2 de diciembre de 2021, en el que sugiere que, al clarificar la competencia del Presidente para la incoación de los expedientes, se añada la expresión “oído el Tribunal”, que se toma en consideración en el texto final.





- Informe de las secretarías generales técnicas de las consejerías, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

No se realizan los siguientes trámites:

- No se solicita el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ya que, conforme al artículo 4.1.a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, el informe de esta Dirección General es preceptivo sólo en el caso de disposiciones reglamentarias de carácter ejecutivo, siendo así que el anteproyecto normativo objeto de informe tiene carácter estrictamente organizativo.
- En el presente caso, al tratarse de una norma organizativa, no procede la práctica de los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, según lo previsto en el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo y en el artículo 60.3 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid.

### **3. La norma proyectada no figura en el Plan Normativo**

El Decreto 52/2021, de 24 de marzo, establece en su artículo 3 que durante el primer año de cada legislatura se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid el Plan Normativo aprobado por el Consejo de Gobierno para dicho período.

## **V. ANÁLISIS DE IMPACTOS.**

### **1. Impacto jurídico y administrativo.**

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en su artículo 26.1.1, reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid para establecer su organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, regula en su artículo 3 el régimen jurídico del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

### **2. Impacto económico y presupuestario**

El anteproyecto propuesto no conlleva ningún impacto económico, ya que se trata de una norma organizativa de la Comunidad de Madrid.

Se atribuye la competencia al órgano que venía ejerciéndola, por lo que no se produce ningún incremento del gasto ni disminución de ingresos.

### **3.- Impacto por razón de género.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que, examinado el objeto y contenido del anteproyecto de ley, no es pertinente la dimensión de género en su aplicación sin que proceda por ello evaluar el impacto potencial del proyecto normativo en los hombres y en las mujeres, por considerar que de la misma no derivan políticas discriminatorias.

### **4.- Impacto en la infancia, adolescencia y familia.**



De acuerdo con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se informa que, al tratarse de una norma de carácter organizativo, carece de impacto en la infancia, adolescencia y familia.

#### **5.- Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.**

De conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, al tratarse de una disposición de carácter organizativo esta disposición carece de impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

#### **6.- Impacto sobre unidad de mercado en el territorio nacional.**

El anteproyecto de ley carece impactos en la unidad de mercado ya que no regula de forma directa ni indirecta un sector económico o alguna actividad económica objeto de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, por lo tanto, no establece nuevas barreras u obstáculos o requisitos para el acceso o ejercicio de dichas actividades. Por esa misma razón, no afecta a la competencia o la competitividad de las empresas madrileñas. De ello se deduce, además, que no resulta procedente su remisión a la Plataforma regulada en el artículo 14 de esa Ley.

La norma proyectada carece de impactos específicos sobre las PYME.

#### **V.- NORMAS DEROGADAS**

En el proyecto normativo se deroga la disposición transitoria de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

